

C.A. de Santiago

Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

**VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:**

**PRIMERO:** Que comparece don Ignacio García Suárez, abogado, en representación de don Manuel Monsalve Benavides, en su calidad de Jefe Superior de la Subsecretaría del Interior, e interpone reclamo de ilegalidad en contra del Consejo para la Transparencia, representado por don David Ibaceta Medina, por la decisión adoptada en Sesión Ordinaria N° 1311 del Consejo Directivo, de 4 de octubre de 2022, recaída en la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5897-22, por medio de la cual ha dispuesto la entrega a doña Sofía Hamilton Montero, de todos los correos de salida y entrada de su correo electrónico shamilton@interior.gob.cl (usuario shamilton) desde abril del 2018 a marzo 2022.

Relata que mediante solicitud de acceso a la información folio AB001T0007700, de 18 de mayo de 2022, doña Sofía Hamilton Montero, requirió la entrega de los correos indicados a la Subsecretaría de Interior, solicitud que fue denegada mediante Oficio N° 12.733, de 13 de junio de 2022, fundada en los siguientes argumentos:

a) Los correos electrónicos constituyen una forma de comunicación que puede abarcar una multiplicidad de situaciones humanas o de hecho, similares a las que se producen a través de las llamadas telefónicas que las personas tienen día a día al interior de los órganos de la Administración del Estado, y por ende, no tienen la relevancia necesaria para justificar su publicidad en aras del control social. Por ello, no constituyen información pública al tenor del artículo 8 de la Carta Fundamental, según jurisprudencia del Consejo y de la Corte de Apelaciones de Santiago.

b) Los correos electrónicos requeridos no corresponden a actos administrativos, y tampoco sirvieron de fundamento para la dictación de alguno, criterios ambos que han sido establecidos por el Consejo para efectos de considerar que un correo electrónico pueda, eventualmente, constituir información pública susceptible de entregar mediante solicitudes de acceso a información.

c) Aun cuando los correos electrónicos requeridos fueran considerados como documentos públicos, corresponde denegar su entrega en vista de que fueron enviados y recibidos en el contexto de la prestación de



servicios íntimamente vinculados a asesorías en investigaciones criminales en que el Ministerio del Interior lo necesitare, así como elaborar minutas sobre materias penales, de acuerdo con el objeto de los contratos de honorarios a suma alzada suscritos entre la parte solicitante y este organismo. Por ende, su divulgación afectaría el cumplimiento de las funciones que le corresponden a esta Subsecretaría en materia de mantención y resguardo del orden y seguridad pública.

d) Dado que el requerimiento no especifica materia alguna que lo acote, corresponde denegar su entrega en vista que el volumen de información relacionado comprende un período de casi 4 años, lo cual, en consideración a la cantidad de personal que actualmente desempeña funciones en este organismo en materias de transparencia, así como el tiempo que se destinaría para satisfacer la sistematización de tales antecedentes, configura la causal de denegación del artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley N° 20.285.

e) Por último, no obsta a lo anterior la circunstancia que la parte solicitante haya utilizado la casilla de correo electrónico para la prestación de sus servicios, puesto que tal medio se entregó para facilitar las comunicaciones con otras unidades dependientes del Estado, lo cual no implica, de manera alguna, una titularidad respecto de la información allí contenida, por cuanto los organismos públicos deben cautelar la información reservada que pudiese encontrarse en dichas casillas, especialmente si se refiere a procesos penales aún en curso.

Agrega que, notificada de la solicitud de amparo presentada por doña Sofía Hamilton, presentó sus descargos dentro de plazo mediante Oficio N° 19.556, de 2 de septiembre de 2022, en el que repite los argumentos esgrimidos en un su negativa original.

Por Oficio E19.415 de 6 de octubre de 2022 se comunica a la recurrente la decisión del Consejo para la Transparencia de acoger el amparo, relatando esa parte que la resolución, en síntesis, expresa lo siguiente:

a) Que la entrega de las comunicaciones en las que la solicitante fue emisora o receptora no supone una intromisión a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones a que se refiere la Constitución Política de la República en los números 4 y 5 del artículo 19, que sólo se configura



cuando un tercero ajeno a la comunicación pretende acceder a ella, lo que no ocurre en este caso.

- b) Que según lo dispuesto en los artículos 5, inciso 2º, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, calificación o procesamiento, además de aquella contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrase sujeta a alguna de las causales de reserva establecidas en el artículo 21 de la misma Ley. Por ello, la información contenida en los correos electrónicos institucionales, se considera información pública, salvo que concurra a su respecto alguna de las causales de reserva antes señaladas.
- c) Que el órgano reclamado no aportó antecedente alguno que permita acreditar el modo en que la entrega de la información reclamada, afecta el debido cumplimiento de sus funciones, por tratarse de antecedentes necesarios a defensas jurídicas y judiciales, no acreditando fehacientemente los hechos que configuran dicha hipótesis de reserva.
- d) Que la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que acrediten la distracción indebida alegada, no precisando la forma concreta en que la entrega de lo pedido implicaría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, en circunstancias que la respuesta a las solicitudes de acceso a información y la entrega de información pública forma parte de dichas funciones.

Reclama la recurrente que el Consejo, en su resolución, omitió referirse a la alegación de su parte de configurarse en el presente caso la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, y tampoco se refirió al hecho que la solicitante se obligó contractualmente a no utilizar la información requerida para fines ajenos a los institucionales.

Respecto de la primera causal de objeción, expresa que, según argumentó oportunamente, la publicidad, comunicación o conocimiento de la información requerida afectaría la mantención del orden público y la seguridad pública, al tenor de lo dispuesto en la disposición citada, explicando que la solicitante es abogado y fue contratada en calidad de honorarios a suma alzada, a partir del 1 de abril de 2018, suscribiéndose diversos contratos de la



misma naturaleza, hasta el 28 de marzo de 2022, fecha en la que dejó de prestar sus servicios. En virtud de tales contratos, prestó servicios de asesoría jurídica en materias penales, relativas a investigaciones criminales, así como de asistencia a audiencias en representación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; elaboración de informes y escritos; presentación de querellas y realización de alegatos, tal como lo dispone la cláusula primera de todos los contratos que suscribió con este organismo, cuyas fechas detalla.

Según la recurrente, se desprende de lo anterior que los servicios de la solicitante se relacionaban con funciones estratégicas encomendadas al Ministerio, específicamente en virtud de los artículos 101 de la Constitución Política de la República; 3, letra a), del Decreto con Fuerza de Ley N° 7.912, de 1927, del Ministerio del Interior; 10 de la Ley N° 18.314; y 1, 3, 4 y 9 de la Ley N° 20.502, los cuales se refieren, efectivamente, a aspectos críticos llevados por esa Cartera, tales como la facultad de interponer querella por delitos que alteren especialmente la tranquilidad de la población y la seguridad interior del Estado, así como la mantención del orden público y la seguridad pública interior; los datos sobre su ocurrencia y las acciones y medidas adoptadas a su respecto; así como diversa información sobre causas penales aún vigentes. Cita al efecto parte del contenido de las normas citadas para mostrar la relación entre las querellas y la mantención del orden público o la seguridad pública, agregando que toda esa información se encuentra precisamente en los correos que se solicitan.

Agrega que, además, los servicios prestados tuvieron como principal insumo la información estratégica aportada directamente por la recurrente, relacionada con investigaciones criminales y causas penales, además de los antecedentes y asuntos que conoció a causa, en razón o con ocasión de tales servicios, por lo que la información contenida en los correos solicitados afectaría la prevención, investigación y persecución de ilícitos respecto de los cuales el Ministerio se ha querellado o planea querellarse.

Estima que, en razón de lo anterior, de ordenarse por el Consejo la entrega de la información requerida, la recurrente debería analizarla de manera previa y exhaustiva, para efectos de evitar la divulgación de antecedentes que, mediante su publicidad, pudieren afectar no solo las capacidades y efectividad de las tareas que deben realizar todos los organismos encargados, de una u otra manera, de la mantención del orden y



seguridad pública, sino que, además, los derechos de terceros, en relación con la difusión de sus datos personales.

Asimismo denuncia que la resolución del Consejo sólo se hace cargo de la causal de reserva del artículo 21 N° 1, letra a), de la ley N° 20.285, opuesta por la recurrente, omitiendo efectuar razonamiento respecto a si, con la divulgación de los antecedentes contenidos en los correos solicitados, se afectaría o no la mantención del orden público o la seguridad pública, al tenor de lo dispuesto en el N° 3 del citado artículo 21, reproduciendo partes del texto de la resolución de amparo que impugna, lo que estima relevante no sólo desde el supuesto de existir litigios pendientes, sino también en el caso de no existir juicio alguno en donde se pueda utilizar dicha información, puesto que ella se relaciona con funciones estratégicas encomendadas al Ministerio del Interior.

Afirma la recurrente que lo expuesto muestra que la resolución del Consejo padece de un primer vicio de ilegalidad, al no realizar razonamiento alguno en relación con si la entrega de la información requerida afectaría o no la mantención del orden público o la seguridad pública.

El segundo motivo de impugnación lo centra la recurrente en que el Consejo para la Transparencia, en su resolución, omite referirse a la alegación relativa a que la solicitante se obligó contractualmente a no utilizar la información requerida para fines ajenos a los institucionales, lo que estaría contenido en las cláusulas que cita y reproduce de los diversos contratos celebrados entre ésta y el Ministerio del Interior. Arguye que la decisión de amparo atenta contra el Estatuto Administrativo y el artículo 1545 del Código Civil, que establece que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Así, según la recurrente, mediante un amparo de acceso a la información, se pone en duda la fuerza vinculante de las disposiciones de los contratos que la parte solicitante celebró válidamente, en forma libre y espontáneamente, con pleno conocimiento de los derechos y obligaciones emanadas a su respecto, y sin haber alegado la nulidad de tales contratos ni de las estipulaciones en ellos contenidas.

Reclama, en consecuencia, que la resolución del Consejo padece de este segundo vicio de ilegalidad, por cuanto no realiza razonamiento alguno que permita entender por qué las estipulaciones contractuales antes



señaladas no son aplicables al caso concreto, a pesar de haberse señalado aquello en los descargos efectuados por la reclamante.

Concluye la recurrente solicitando se deje sin efecto la Resolución del Consejo para la Transparencia que acogió el amparo de acceso a la información Rol C5897-22, declarando que la denegación efectuada por la Subsecretaría de Interior del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, mediante Oficio N° 12.733, de fecha 13 de junio de 2022, se ajustó a derecho, no procediendo la entrega de la información requerida mediante solicitud de acceso a la información folio AB001T0007700, de 18 de mayo de 2022, efectuada por doña Sofía Hamilton Montero.

**SEGUNDO:** Que compareció don David Ibaceta Medina, abogado, Director General y representante legal del Consejo para la Transparencia e, informando a esta Corte, solicita el rechazo del reclamo, por los fundamentos que expone.

Indica que el 18 de mayo de 2022, doña Sofía Hamilton Montero solicitó a la Subsecretaría del Interior, todos los emails de salida y entrada de su correo electrónico institucional, desde abril del 2018 a marzo de 2022, a lo que el organismo requerido respondió, mediante el Oficio Ord. N° 12.733, de 13 de junio de 2022, señalando, en síntesis, que denegaba la entrega de la información pedida por configurarse las causales de reserva previstas en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley sobre Acceso a la Información Pública, indicando: *“(...) la casilla de correo electrónico cuya revisión se solicita contiene información vinculada a investigaciones criminales, presentación y tramitación de querellas penales por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se encuentran relacionadas íntimamente a las competencias que le cabe a dicha cartera de Estado en materia de mantención y resguardo del orden y seguridad pública. (...) sería necesario, para cumplir el requerimiento de la especie, revisar todos y cada uno de los correos electrónicos enviados y recibidos y sus adjuntos, para determinar si concurre o no respecto de ellos la causal del artículo 21 N° 1 letra a), o del N° 3, ambos de la ley N° 20.285, sin perjuicio además de la necesidad de tarjar cualquier dato personal que se encuentre en estos, independiente de la materia. En este orden de ideas, dado que el requerimiento no especifica materia alguna que lo acote, sería necesario revisar todos los correos recibidos y enviados entre las épocas solicitadas, lo que abarca un período de casi 4 años. Esto implicaría destinar*



*a las dos funcionarias encargadas de analizar y elaborar las respuestas de Transparencia Pasiva exclusivamente a revisar y, eventualmente, censurar los datos personales o sensibles contenidos en dichos antecedentes, lo cual ciertamente constituye una distracción indebida de las funciones de dicho personal, afectándose con ello el normal cumplimiento de las funciones de este organismo.”* Agrega luego que: “(...) la circunstancia que la solicitante haya utilizado la casilla de correo electrónico para el cumplimiento de sus funciones (...) no implica, de maneral alguna, una titularidad respecto de toda la información que se haya recibido a través de ese medio, puesto que siempre los organismos públicos deben cautelar la información de carácter reservado que pudiese encontrarse en las mismas, especialmente si se trata de procesos penales aún en curso.”

Señala que el 1º de julio de 2022, doña Sofía Hamilton Montero dedujo amparo a su derecho de acceso a la información, fundada en que recibió respuesta negativa a su solicitud, recurso al que, mediante Oficio N° E15898, de 19 de agosto de 2022, se confirió traslado al Sr. Subsecretario del Interior, quien por Oficio N° 19.556, de fecha 2 de septiembre de 2022, señaló que no corresponde entregar los correos electrónicos requeridos, expresando los argumentos que se han señalado al resumir los antecedentes presentados por la recurrente en este reclamo de ilegalidad.

Luego de transcribir diversos pasajes del informe de la Subsecretaría de Interior, el Consejo para la Transparencia informa que mediante la Decisión de Amparo Rol C5897-22, adoptada con fecha 4 de octubre de 2022, acogió el Amparo por Denegación de Acceso a la Información en contra de la Subsecretaría indicada, requiriendo al Sr. Subsecretario de dicho órgano de la Administración, que entregue a la solicitante:

*“La información consignada en el numeral 1º de lo Expositivo del presente Acuerdo (todos los emails de salida y entrada de su correo electrónico institucional, desde abril del 2018 a marzo de 2022), tarjando previamente los datos personales de terceros que pudieran estar incorporados en dicha información, tales como número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, según lo disponen los artículos 2º, letra f), 4º y 7º, de la ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra*



*m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.”*

Indica el informante que, habiéndose analizado los argumentos desarrollados por la solicitante de información y por la Subsecretaría del Interior, en el marco de la Decisión de Amparo Rol C5897-22, así como los fundamentos esgrimidos por dicho órgano, en su calidad de reclamante de ilegalidad, en el ámbito del presente reclamo, hace presente las consideraciones tenidas en cuenta por el Consejo para la Transparencia para adoptar la referida Decisión de Amparo, la que se ajusta a derecho, y a la jurisprudencia judicial sobre acceso y entrega de los correos electrónicos institucionales de funcionarios públicos, por lo que el presente reclamo debe ser rechazado.

Estima el Consejo que el reclamo de autos importa un debate centrado únicamente en determinar si, al acoger el amparo deducido, obró conforme a derecho, y al respecto expone que en el considerando 3) de la decisión reclamada, estableció lo siguiente:

*“3) Que, en primer término, en lo que respecta a los correos electrónicos enviados desde una casilla institucional por su titular, según ha razonado invariablemente este Consejo, entre otras, en las decisiones de los amparos Roles C1293-13, C1864-17, C2342-18, C1285- 19, C2456-20 y C2519-20, dichas comunicaciones son de aquellas en las cuales, su titular, fue parte y ha tomado conocimiento de su contenido. Sobre el mencionado tipo de correos electrónicos, este Consejo, se ha pronunciado a favor de su publicidad, por resultarles plenamente aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, puesto que no cabría invocar la intimidad del propio solicitante como causal de secreto. Por su parte, el análisis de las intromisiones a la vida privada y la inviolabilidad de las comunicaciones a que se refiere el texto constitucional en los numerales 4° y 5° de su artículo 19, sólo se justifica cuando un tercero ajeno a la comunicación pretende acceder a ella, lo que no ocurre en este caso.”*

En consecuencia, en la Decisión de Amparo Rol C2370-22 corresponde utilizar idénticas consideraciones. Concluye en consecuencia el Consejo, que las comunicaciones electrónicas que se ordena entregar no revisten el carácter de privadas, en los términos del artículo 19 N° 5 de la Constitución Política, ya que fueron enviadas y recibidas en el ejercicio de la





función pública por parte de la propia requirente, y no se refieren a asuntos de la vida privada del emisor, y aun cuando así lo estime la Subsecretaría reclamante, lo cierto es que es imposible reservarlos para el propio titular de esas comunicaciones, para quien no pueden ser secretos, ya que ha sido él quien los redactó y recibió, siendo su contenido conocido por éste, por lo que no tiene sentido que la Subsecretaría actúe en contra de la voluntad del titular de la comunicación, por cuanto la ex funcionaria requirente, al solicitar sus propios correos, ha sido la que ha otorgado su consentimiento para que el órgano ingrese al servidor de correo institucional y le proporcione los correos electrónicos enviados y recibidos por su persona en un determinado período, desde la que fue su casilla electrónica, mientras se desempeñó como funcionaria de la Subsecretaría de Interior, lo que descarta cualquier tipo de intromisión indebida o no autorizada para la entrega de sus correos electrónicos.

Según lo expuesto, concluye el Consejo que no es posible sostener que la revelación de los correos en controversia atente contra la vida privada ni la inviolabilidad de las comunicaciones privadas del emisor y receptor de dichas comunicaciones electrónicas, por cuanto se trata de correos que fueron enviados y recibidos en el ejercicio de sus funciones públicas que desempeñaba la solicitante en la Subsecretaría del Interior. Cita en apoyo de esta conclusión la sentencia dictada por la Itma. Corte de Apelaciones de Valparaíso el 16 de enero de 2013, que rechazó el reclamo de ilegalidad Rol N° 2055-2012, parte de la cual transcribe.

Se agrega a lo anterior que en su decisión el Consejo ha establecido que, en atención a que en los correos electrónicos que se ordenará entregar, puede contenerse información de terceras personas involucradas en las investigaciones criminales o querellas penales de las que forma parte el organismo reclamado, éste deberá -previo a su entrega- tarjar los datos personales de terceros, tales como número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7°, de la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada, en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, y en aplicación del principio de divisibilidad, reconocido por el artículo 11, letra e), del mismo cuerpo legal.



Afirma por otro lado el Consejo, que la Subsecretaría de Interior no acreditó la concurrencia de la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, respecto de los correos electrónicos en controversia, en relación con terceros. Señala que la circunstancia de que se trate de correos electrónicos que pudieran estar relacionados con la función que le correspondió ejercer a la ex funcionaria solicitante, no ha sido impedimento para que esta Il. Corte, ratifique el acceso a correos electrónicos que puedan contener información de dicha naturaleza, citando jurisprudencia al efecto. Conforme a ello afirma que la alegación de la recurrente sobre la materia no cumple con el estándar constitucionalmente exigido para acreditar la causal de reserva, pues no basta con sostener o simplemente efectuar una referencia de paso respecto de una pretendida e hipotética afectación de derechos, sino que debe acreditarse fehacientemente su concurrencia, requisito que no ha sido cumplido por el órgano reclamante.

Continúa exponiendo el Consejo que con la promulgación de la Ley N° 20.050, Ley de Reforma Constitucional, se incorporó el nuevo Art. 8° de la Constitución Política, cuyo texto reproduce, el que, ubicado dentro del Capítulo I, denominado “*Bases de la Institucionalidad*”, consagró con el máximo nivel normativo la publicidad de las actuaciones de la Administración, estableciendo que esta consagración sólo puede limitarse a través de una Ley de Quórum Calificado, fundada en que:

- a) La publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones del órgano,
- b) La publicidad afectare los derechos de las personas,
- c) La publicidad afectare la seguridad de la Nación, y
- d) La publicidad afectare el Interés Nacional.

Fundado en dicha disposición, explica el Consejo para la Transparencia que desde la entrada en vigencia del nuevo artículo 8° se estableció el piso de aquellos antecedentes que son considerados como públicos, susceptibles de ser requeridos mediante el ejercicio del “*derecho de acceso a la información pública*”, implícitamente reconocido en el artículo 19 N° 12 de la Constitución Política, y en el inciso 2° del artículo 5 de la misma, que hace aplicable el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ámbito de publicidad que fue legítimamente desarrollado por el legislador al aprobar el artículo 5 de la Ley de Transparencia, teniendo



como única forma de afectación que exista una Ley de Quórum Calificado que establezca el secreto o reserva por las causales antes mencionadas.

Según lo dicho, y considerando que el artículo 8 inciso 2° de la Constitución exige que para que ceda la publicidad y el acceso a la información pública frente al secreto o reserva deba afectarse algunos de los bienes jurídicos protegidos que ella menciona, se concluye que no basta con que exista un caso de secreto o reserva dispuesto por una Ley de Quórum Calificado, o que se invoque alguna de las causales de secreto o reserva del artículo 21 de la Ley de Transparencia, sino que, además, debe adecuarse a algunas de las hipótesis del artículo 8 de la Constitución, esto es, debe acreditarse una real y efectiva afectación de los bienes jurídicos que se protegen, lo que estaría expresamente señalado por la Excma. Corte Suprema, en sentencia que cita y en parte reproduce.

Estima la Comisión informante que la Subsecretaría no ha logrado vencer la presunción legal de publicidad, que reconoce que toda información que obre en poder de los órganos de la Administración en principio es pública, ni tampoco ha acreditado fehacientemente la afectación de derechos, sino que simplemente especula sobre los eventuales perjuicios de la divulgación de los correos electrónicos enviados y recibidos por la solicitante. Es claro que los correos electrónicos fueron enviados y recibidos por la ex funcionaria, ejerciendo funciones públicas y mediante equipos informáticos de un organismo de la Administración del Estado, por lo que su contenido y destinatarios son conocidos por la solicitante, los que deben ser proporcionados a la misma, ya que a su respecto no se configura la causal de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.

Agrega a continuación la informante que la Subsecretaría de Interior infringe los artículos 11, letra g) y 19 de la Ley de Transparencia al especular sobre el uso que la solicitante le pudiera dar a los correos electrónicos requeridos. Ello porque la Subsecretaría funda también su negativa a entregar los correos en que la parte solicitante se obligó contractualmente a no utilizar la información requerida para fines ajenos a los institucionales. Ello porque el artículo 11 no contiene en ninguno de los principios que establece, como requisito, una motivación o interés para solicitar la información, en tanto que el artículo 19 impide que se puedan imponer condiciones de uso o restricciones a su empleo.



También objeta el Consejo la confidencialidad contractual alegada por la Subsecretaría de Interior porque no es admisible que prime el secreto establecido en virtud de cláusulas contractuales por sobre la fuerza obligatoria de la Constitución, pues ello infringe el principio de jerarquía normativa: Un contrato no puede estar sobre lo dispuesto en la ley, ni mucho menos, en la Constitución, en cuyo inciso 2° del artículo 8, expresamente se dispone que la reserva o secreto debe ser establecida en virtud de ley de quórum calificado. Cita al respecto jurisprudencia de esta Corte y de la Excma. Corte Suprema.

Concluye afirmando el Consejo que no se ha excedido en sus atribuciones al disponer la entrega de los correos electrónicos requeridos, pues no se trata de comunicaciones privadas, y rechaza la errada afirmación de la Subsecretaría recurrente al acusar al informante de haber actuado en forma improcedente, apartándose de la legalidad vigente, pues, muy por el contrario, el Consejo para la Transparencia, al resolver el amparo de autos, ha actuado dentro de su competencia y en estricto cumplimiento del mandato legal establecido en los artículos 16, 24 y 33, letra b), de la Ley de Transparencia, siguiendo el procedimiento establecido por esta misma ley, interpretando las normas legales aplicables al caso en cuestión, por lo que solicita el rechazo del Reclamo de Ilegalidad presentado y mantener o confirmar la Decisión de Amparo Rol C5897-22 del Consejo para la Transparencia.

#### **CONSIDERANDO:**

**TERCERO:** Que se ha presentado reclamo de ilegalidad por la Subsecretaría de Interior, respecto de la Decisión de Amparo Rol C5897-22, adoptada el 4 de octubre de 2022 por el Consejo para la Transparencia, mediante la cual, acogiendo el recurso interpuesto por doña Sofía Hamilton Montero, por la negativa de la Subsecretaría indicada a entregar todos los correos electrónicos de salida y entrada de la casilla de la solicitante, shamilton@interior.gob.cl, desde abril de 2018 a marzo de 2022, dispuso la entrega de todos los correos señalados, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudieran estar incorporados en dicha información, tales como número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, estado civil, domicilio, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, según lo disponen los artículos 2°, letra f), 4° y 7° de la Ley N° 19.628, sobre protección a la vida privada.



**CUARTO:** Que la Subsecretaría de Interior denuncia que la Decisión de Amparo Rol C5897-22, adolece de dos vicios, el primero consistente en omitir referirse a la infracción de la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 3 de la Ley N° 20.285, puesto que la publicidad, comunicación o conocimiento de la información requerida afectaría la mantención del orden público y la seguridad pública; y, el segundo vicio, radicado en que la solicitante de la información prestó servicios como abogado en la Subsecretaría y contractualmente se obligó a mantener confidencialidad respecto de la información a que tuvo acceso en razón de sus funciones.

**QUINTO:** Que revisados los fundamentos de hecho y de derecho de la decisión de amparo Rol C5897-22, adoptada por el Consejo para la Transparencia el 4 de octubre de 2022, que acogió el Amparo por Denegación de Acceso a la Información impetrado por doña Sofía Hamilton Montero, referida a su requerimiento de entrega de todos los correos de salida y entrada de su correo electrónico shamilton@interior.gob.cl (usuario shamilton) desde abril de 2018 a marzo de 2022, cabe señalar que el órgano recurrido explica y razona los motivos por los cuales la información documental solicitada por doña Sofía Hamilton Montero, no es de aquella que tenga el carácter de secreta o amparada en reserva legal, y que por lo tanto que su *“publicidad, comunicación o conocimiento afecte la seguridad de la Nación, particularmente si se refiere a la defensa nacional o la mantención del orden público o la seguridad pública”*, como establece el artículo 21 N° 3 de la Ley 20.285, que es la causal legal invocada por la reclamante Subsecretaría del Interior, y que es desestimada por la reclamada.

**SEXTO:** Que, conforme al inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, sólo una ley de quorum calificado podrá establecer la reserva o secreto de los actos, resoluciones, fundamentos o procedimientos de los órganos del Estado, y ello cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional. A estos criterios debe ajustarse la aplicación de la Ley N° 20.285, constituyendo el secreto o reserva una situación excepcional cuya procedencia no logra acreditar la recurrente.

**SÉPTIMO:** Que el segundo vicio alegado por la recurrente, según el cual el Consejo para la Transparencia no debió haber acogido el amparo de la



solicitante por haber celebrado ésta con la Subsecretaría del Interior contrato que contenía cláusula de confidencialidad, no tiene asidero en la medida que las convenciones contractuales no pueden modificar normas constitucionales ni legales de orden público sino que, por el contrario, pierden validez si se contraponen a éstas. Se agrega a ello que toda la información que pide la solicitante le es absolutamente conocida, puesto que participó directamente en su generación.

**OCTAVO:** Que los correos electrónicos generados desde una casilla institucional son públicos, dicen relación directa con el ejercicio de un cargo o función, se generan a través de una herramienta tecnológica que la solicitante tuvo por haber sido entregada por el Estado, costeadada por el presupuesto nacional y apoyada técnicamente por la plataforma de la entidad respectiva, todo ello con el objeto de facilitar el cumplimiento de sus tareas, por lo que no puede sostenerse la necesidad ni procedencia de mantener estas comunicaciones al margen del control público.

Por estas consideraciones, y con arreglo a lo dispuesto en la Ley N° 20.285, **SE RECHAZA**, sin costas, el reclamo de ilegalidad deducido por la Subsecretaría del Interior, en contra de la Decisión de Amparo C5897-22, adoptada por el Consejo para la Transparencia, que mediante la decisión de amparo Rol C 5637-22, de fecha 4 de octubre de 2022.

**Regístrese y comuníquese.**

Redactada por el Abogado Euclides Ortega Duclercq  
N°Contencioso Administrativo-552-2022.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Marisol Rojas Moya e integrada por el Ministro (S) señor Hernán Gonzalo López Barrientos y por el el Abogado Integrante señor Euclides Ortega Duclercq. No firma el Ministro (S) señor López por haber terminado su suplencia.



Pronunciado por la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago integrada por Ministro Marisol Andrea Rojas M. y Abogado Integrante Euclides Ortega D. Santiago, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés.

En Santiago, a veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

